



CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD
Y POLÍTICA SOCIAL



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro
Financiado como parte de la respuesta de
la Unión a la pandemia de COVID-19

ORDEN

NÚMERO : 460/2021

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Expte.: AM-005/2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del Acuerdo Marco “**ACOMPANIAMIENTO EDUCATIVO Y ALOJAMIENTO PARA JÓVENES DE 18 A 21 AÑOS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020, FONDOS REACT- UE.**”, a propuesta de la Dirección General de Integración, cuya adjudicación se efectuará por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, al amparo de lo previsto en los artículos 131 y 146.2, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, justificando su necesidad en los siguientes motivos:

De acuerdo con el artículo 9.3 del Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, a la Dirección General de Integración le corresponde en materia de inclusión social, “*e/ impulso de políticas de servicios sociales en relación con las personas y grupos en situación o riesgo de exclusión social, personas sin hogar, inmigrantes, minorías étnicas y otros grupos de población en situación de necesidad o de vulnerabilidad social, así como la gestión de las prestaciones que, en su caso, se deriven de las mismas*”.

La concurrencia de competencias entre Direcciones Generales de la misma Consejería sobre los mismos usuarios hace que la colaboración deba ser intensa por el bienestar de estos jóvenes y legítima sus intervenciones en el desarrollo del servicio desde sus respectivos ámbitos, para dar continuidad al trabajo desarrollado cuando eran menores.

La experiencia de la Comunidad con los jóvenes protegidos pone de manifiesto que, al alcanzar la mayoría de edad y cesar, en consecuencia, la acción jurídica protectora, ha de hacerse un tránsito a la vida adulta acelerado y comprimido, agravado por las circunstancias familiares y sociales que dieron lugar a la medida de protección. El tránsito a la vida adulta se convierte así en un proceso de alto riesgo, y el joven resulta, sin duda especialmente “*vulnerable*”, por doble partida, por escasez de recursos personales, y por la inexistencia, o presencia limitada, de un entorno social y familiar que ofrezca los apoyos necesarios y agravado, en muchos casos, por la dificultad añadida de contar con un techo bajo el que cobijarse tras su salida del centro de acogimiento residencial.

Por otro lado, la edad de emancipación, en gran parte de los países de nuestro entorno, se ha ampliado hasta casi los 30 años y la crisis económica y social afecta, en mayor medida, a la empleabilidad de los jóvenes. Todo ello posiciona al colectivo de extutelados en una situación de desigualdad respecto del resto de jóvenes de su edad, por lo que se impone que puedan contar con apoyo social y educativo, así como con alojamiento y manutención, que faciliten el tránsito a la vida adulta para todos aquellos que lo necesiten.

El *Informe sobre la Vulnerabilidad Social ‘Personas Jóvenes en extutela y/o riesgo de exclusión social’*, realizado por Cruz Roja en el mes de septiembre del 2020 ilustra que el 84% de los jóvenes extutelados atendidos en el marco de colaboración con la Comunidad de Madrid, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. El 81,5% está en paro, el 84% no recibe ninguna prestación o subsidio, un 10% se ve obligado a vivir en la calle o en situación de alta precariedad o que el 55% no tiene a nadie que le exprese afecto, cariño o acompañe. El 31% son españoles y el 66% extranjeros extracomunitarios.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1258000954705746251567

Investigaciones, tanto a escala nacional como internacional, coinciden contundentemente en estas particulares dificultades que afrontan los jóvenes procedentes del sistema de protección, y la necesidad, por tanto, de apoyos más allá de los 18 años hasta los 21 como mínimo.

De hecho, cada día existe mayor interés y atención de los poderes públicos a este respecto, tanto a escala europea, como estatal y autonómica. Buena prueba de ello son los Programas Operativos del Fondo Social Europeo de la Estrategia Europea 2020, los nuevos objetivos políticos y específicos del Fondo Social Europeo Plus en el marco del período de programación 2021- 2027, los objetivos operativos definidos por los Planes Estratégicos de las distintas Administraciones Públicas, así como la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia operada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, que actualizan diferentes cuerpos legislativos, para adecuarlos a los cambios sociales producidos en los últimos años así como a la normativa internacional reciente. En particular, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de marzo, de Protección Jurídica del Menor contempla ahora, en su artículo 22 bis, que las Entidades Públicas habrán de ofrecer programas de preparación para la vida independiente para jóvenes bajo medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, y una vez cumplida ésta, siempre que lo necesiten, para seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas. En la misma dirección ha ido la normativa y los planes estratégicos de los que han ido dotándose la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas

Para dar respuesta a esta necesidad social, la Comunidad de Madrid, ha implementado el Plan de Autonomía Personal 16-21, destinado a procurar itinerarios que permitan compensar los déficits y mitigar los riesgos de la emancipación precoz y acelerada de estos jóvenes. Este Plan cuenta con dos programas, el Programa de Autonomía Personal 16-18 y el Programa de Tránsito a la Vida adulta 18-21. Éste último, para mayores de 18, contempla ampliar el acompañamiento y seguimiento de los jóvenes del sistema de protección, hasta al menos los 21 años, para que cuenten con los recursos sociales necesarios que prevengan el riesgo de exclusión social. Para ello, se han identificado tres áreas de intervención: alojamiento y manutención, inserción sociolaboral e intervención familiar.

Por todo lo anteriormente expuesto, la ahora Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad articuló con entidades de la iniciativa social, coincidentes en sus objetivos con las competencias de la Administración, una serie de convenios para fomentar la colaboración mutua y prestar la atención a los jóvenes que, habiendo pertenecido al sistema de protección infantil, cumplieran la mayoría de edad y se encontraban en situación de dificultad y desventaja social, para procurar su tránsito a la vida adulta en condiciones satisfactorias que les permitiera alcanzar la plena autonomía y prevenir el riesgo de exclusión social, trabajando para que todos tengan igualdad de oportunidades, desarrollando su potencial y fomentando su responsabilidad social, apoyando sus procesos de formación e inserción laboral.

Actualmente, hay 115 plazas concertadas con 16 entidades diferentes y financiadas, tanto por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (102 plazas), como por la Dirección General de Integración (13 plazas) con plena ocupación.

Fecha	LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (P.D. Orden 1558/2021, de 28 de septiembre, BOCM nº 239, de 07/10/2021)
04/03/2022	EL VICECONSEJERO DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

